

“LAS MASACRES DE RÍO NEGRO”

La presa de Chixoy – Guatemala

Muerte en Río Negro

Texto: Patrick McCully

La presa de Chixoy se construyó en las tierras guatemaltecas de los indígenas maya achí, en el contexto de una feroz guerra civil. Cuando los miembros de esa comunidad se negaron a que los realojaran y prefirieron luchar por conseguir unas mejores condiciones, fueron secuestrados, torturados y masacrados. El ejército y las fuerzas paramilitares asesinaron a 444 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños. Financiada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y construida por empresas italianas, alemanas y estadounidenses, la presa desplazó a más de 3.500 personas. Otras 6.000 familias también sufrieron la pérdida de tierras y medios de vida. Desde la finalización de la presa a mediados de la década de 1980, las comunidades desplazadas se han visto obligadas a vivir en una pobreza extrema en tierras infértiles y en viviendas indignas, sin electricidad ni agua corriente.

Durante esta última década, esas comunidades han trabajado con organizaciones internacionales de derechos humanos y medioambientales para presionar al gobierno guatemalteco y a los inversores en la presa para que les indemnicen por los daños sufridos.

«El gobierno consiguió dinero de donantes internacionales para construir la presa —explica Carlos Chen, antiguo residente de Río Negro, localidad que hoy se encuentra inundada, a cien metros bajo el agua del embalse de Chixoy— y lo utilizó para asesinar a mi pueblo». La mujer y los hijos de Chen se encontraban entre las víctimas de la masacre de Chixoy. Chen es uno de los líderes que hoy trabajan para conseguir indemnizaciones para los supervivientes de esa masacre.

Las matanzas comenzaron en marzo de 1980, cuando fuerzas de seguridad asesinaron a siete personas en la iglesia de Río Negro. Los asesinos robaron documentos que certificaban las propiedades legales de la comunidad y los

compromisos de indemnización hechos a los habitantes del pueblo por la compañía eléctrica INDE (Instituto Nacional de Electrificación). Aquel mes de julio, dos líderes de la comunidad, Valeriano y Evaristo Osorio Chen, fueron convocados a una reunión con el INDE. Nunca regresaron de allí. Sus cuerpos mutilados fueron hallados a 40 kilómetros de distancia, en el interior de un barril.

Pese a aquella campaña de terror, la mayoría de las familias cuyas tierras iban a ser inundadas por la presa se negaron a marcharse. Más tarde, en febrero de 1982, el comandante del ejército local ordenó a 73 hombres y mujeres de Río Negro que se presentaran en Xococ, un pueblo río arriba de la zona de la presa. De aquellas 73 personas, sólo una mujer regresó a Río Negro; el resto fueron violadas, torturadas y asesinadas. El mes siguiente, un grupo de soldados y paramilitares llegó a Río Negro, acorralaron al resto de mujeres y niños y los condujeron a una colina cercana al pueblo. Setenta mujeres y 107 niños fueron asesinados. Sólo dos mujeres consiguieron escapar. Dieciocho niños fueron llevados a Xococ como esclavos de los paramilitares. Dos meses más tarde, 82 personas más de Río Negro fueron masacradas. En septiembre, 35 huérfanos de Río Negro se encontraban entre las 92 personas que fueron acibilladas por metralletas y quemadas vivas en otro pueblo cercano a la presa. El llenado del embalse comenzó poco después de esta última masacre.

A pesar de enviar numerosas misiones para supervisar el proyecto, el Banco Mundial guardó silencio sobre todas aquellas muertes hasta 1996, cuando algunos grupos de derechos humanos presionaron para que se llevara a cabo una investigación internacional. Dicha investigación demostró que las masacres se habían cometido, pero el Banco Mundial negó tener ninguna responsabilidad sobre las mismas.

Desde 1996, las comunidades desalojadas por la presa Chixoy han estado haciendo campaña para conseguir indemnizaciones por los daños sufridos. Estas comunidades exigen que el gobierno les proporcione tierras adecuadas de cultivo, acceso a agua corriente y electricidad, ayuda para el desarrollo económico local y programas educativos y sociales.